



Proceso electoral en Guatemala: una mirada campesina

Leocadio Juracán

Comité Campesino del Altiplano (CCDA)

En medio de un proceso electoral muy cuestionado en el que se ha utilizado la violencia de forma desvergonzada, un proceso con una enorme cantidad de partidos que impulsan una campaña electoral clientelar y populista al punto de normalizar el financiamiento electoral ilícito, la participación de candidatos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado, en medio de todo, eso los pueblos originarios y campesinos continuamos el clamor por la madre tierra, la justicia agraria, los derechos y dignificación laboral, la restructuración del sistema nacional de salud, la educación de calidad en el idioma de nuestros territorios, la soberanía alimentaria, la autodeterminación de los pueblos, el respeto a las formas de organización y la participación democrática de los pueblos, así como iniciativas de inclusión, arraigo y derechos de mujeres y juventudes rurales como principales demandas.

Históricamente los gobernantes en Guatemala han tenido a la población indígena y campesina excluida y marginada. Esta situación provocó los 36 años de conflicto armado interno, que tuvieron como logro los Acuerdos de Paz. Dichos acuerdos generaron muchas expectativas y esperanzas en el pueblo guatemalteco. Sin embargo, también trajeron consigo una primera fase de desmovilización y neutralización de los movimientos sociales que, en varios casos, se

concentraron en esfuerzos legislativos dejando de lado el origen y naturaleza de los movimientos sociales. Asimismo, la estrategia estatal de cooptación ha alcanzado a nuestras organizaciones. En los distintos momentos históricos de acción política cargados de represión y criminalización, lo que había sido una estrategia de desmovilización y neutralización se transformó en el descabezamiento de nuestro movimiento. El asesinato de líderes comunitarios, así como el estigma y la judicialización, han llevado a algunos al punto de doblegarse ante los intereses del capital, lo que mantiene y refuerza el actual modelo de desarrollo capitalista en Guatemala.

Por otro lado, la falta de unidad en la presente contienda ha desempolvado opiniones públicas importantes para la reflexión al interior de nuestras organizaciones y para el movimiento campesino e indígena. Por un lado, los egos y caudillismos imposibilitan que algunos liderazgos aglutinen a la sociedad para potenciar las demandas existentes de la población descontenta. Por otro lado, la presión generada por la desarticulación, el descabezamiento, la invisibilización de la lucha indígena y campesina, así como por la demanda latente para resolver problemas estructurales al mismo tiempo que atender las necesidades urgentes, ha generado importantes disputas en los

liderazgos, en las bases e incluso en el uso de los recursos para lograr sobrevivir ante esta presión.

Pero más preocupante aún resulta la cooptación de cuadros indígenas y campesinos para participar de forma electoral con partidos que representan políticas conservadoras, que buscan continuar con el statu quo. Resulta muy indignante que algunos de nuestros hermanos siguen sin darse cuenta de que los utilizan para ultrajar a su propia gente. Por otro lado, al interior de nuestras organizaciones no se ha avanzado lo suficiente en la garantía de espacios seguros para mujeres y jóvenes, así como tampoco hemos sido capaces de generar nuestra auto sostenibilidad sobre la base de los principios del Buen Vivir.

Las organizaciones hemos asumido la participación política electoral desde los liderazgos históricos, lo que vemos en dos vías. Por un lado, positivo por el involucramiento y la garantía de llevar las demandas indígenas y campesinas a espacios de toma de decisión. Por otro, creemos que es muy importante ser responsables para analizar la fuerza representativa real; además, algunos de los pocos espacios logrados con votos de la sociedad consciente han terminado de frustrar la esperanza con su accionar y los pocos avances. Para estas elecciones se visualiza aún más la fragmentación de bases indígenas y campesinas porque las disputas por el poder entre varias organizaciones sociales, producen que los intereses políticos electorales hagan de lado el abordaje de temas estructurales demandados por las bases.

Con responsabilidad y de manera autocrítica consideramos que actualmente no hay organizaciones indígenas, campesinas o de la sociedad civil con bases suficientes para hacerle frente al sistema, para sostener una disputa real por el poder político, y de eso estamos conscientes. Sin embargo, estamos lejísimos de fomentar una verdadera UNIDAD sobre principios y valores para la construcción de la Guatemala diversa. Ya no debemos generarnos falsas expectativas creyendo que nuestra organización, en particular, es capaz de lograr los cambios estructurales.

Es necesario buscar un mecanismo de articulación y coordinación desde lo interno de nuestras organizaciones y redes regionales. Coordinarnos entre nosotros para que a nivel nacional podamos conectarnos y articularnos desde las bases y así generar un movimiento con dirigentes frescos, de campesinos, auto-

ridades ancestrales, hombres y mujeres del campo, juventudes, etc. También se hace necesario fortalecer y cuidar las redes ya existentes, revolucionarlas, hacer que de ellas nazca una lucha de resistencia que nos obligue a buscar alianzas y coaliciones. Nuestras organizaciones históricas deben de extenderse a territorios con mayor membresía y disputar el poder en los pueblos y comunidades de mayor fortaleza. El problema es que todos están disputando el poder en las mismas regiones y eso lleva a la fragmentación de las propuestas políticas progresistas y de izquierda.

Otro reto es la organización de grupos de la sociedad civil con una alta representatividad, como los 48 cantones de Totonicapán, a quienes se les admira por su papel organizativo y sus mecanismos de lucha y resistencia. Sin embargo, no compartimos con ellos su falta de posicionamiento para la disputa del poder real y consciente.

Algo similar sucedió en Sololá, donde anteriormente se veía una gran fuerza entre los cantones aglutinados en la municipalidad indígena y se tenía cierta organización social entre URNG y el Comité Cívico “La Chaqueta”. Sin embargo, por la cooptación y ambición de algunos miembros se dividieron en varias organizaciones políticas, creando más comités cívicos. Algunos de sus ex miembros incluso se aliaron a partidos de la derecha recalcitrante.

La cooptación del Estado y sus instituciones ha llegado al Tribunal Supremo electoral, que en este contexto ha jugado un papel complaciente, materializando peticiones que emanan del ejecutivo y legislativo y vedando el derecho a la participación política democrática de actores que surgieron de los movimientos sociales y la sociedad civil, como son los casos del Binomio presidencial del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), así como del actual diputado Aldo Dávila. Para quienes promueven el subdesarrollo y la impunidad en el país, estos actores son un verdadero atentado contra los fines e intereses de la rancia oligarquía y el pacto de corruptos.

Resaltamos el caso de Thelma Cabrera, compañera y hermana, presidenciable del MLP, quien ha sido víctima de la violencia electoral, racista, clasista y patriarcal al ser una lideresa que ha dirigido la lucha de los pueblos, las mujeres, los campesinos y los empobrecidos. Habrá que recordar que en las elecciones pasadas se ubicó en el cuarto lugar para la presiden-

JURACÁN: UNA MIRADA CAMPESINA

cia, lo que indica que representaba una oportunidad real en estas elecciones para los históricamente excluidos en Guatemala.

Analizando los planes de gobierno de los partidos políticos y su oferta populista, la agenda campesina y la agenda rural están ausentes. La falta de formación política en la población guatemalteca pasa factura en los momentos de elección de autoridades. Existe un desconocimiento de los candidatos a diferentes cargos de elección popular y el llamado al voto llega sólo desde algunos pseudo-líderes, sin conocer el origen, trayectoria y planes de los partidos políticos y sus candidatos.

Esta realidad nos lleva a cuestionarnos cuál es el modelo económico que pretende resolver la situación estructural del país, en qué modelo democrático se pretende ejercer el trabajo de la institucionalidad, dónde quedan las demandas de la población indígena y

campesina que clama por justicia agraria, por el cese de la represión sistemática, el desmantelamiento de la institucionalidad y la presencia del Estado como mandato constitucional. Nuestro planteamiento es y seguirá siendo un Estado que garantiza derechos y está al servicio de la población.

Para hacer frente a esta descomposición social, proponemos seguir articulando y fortaleciendo las redes comunitarias y territoriales, seguir apostando a la formación política, cuestionar y denunciar permanentemente la impunidad, corrupción y saqueo de los territorios.

Es importante seguir reivindicando las demandas de pueblos originarios y campesinos, que siguen siendo claves para el Reconocimiento de sus Derechos Ancestrales en los territorios. Debemos posicionarnos en contra de los que buscan continuar en el poder para seguir vulnerando derechos. •